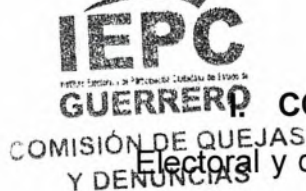


**EXPEDIENTE: IEPC/CCE/PES/039/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

ACUERDO 021/CQD/22-05-2021

ACUERDO PLENARIO SOBRE LA PROCEDENCIA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A FAVOR DE LA CIUDADANA ENEIDA LOZANO REYES, POR PRESUNTOS ACTOS QUE PODRÍAN CONSTITUIR VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LA MUJER EN RAZÓN DE GÉNERO, RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CON CLAVE IEPC/CCE/PES/039/2021.

RESULTANDO



CONVOCATORIA. El dieciséis de abril de dos mil veintiuno, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, a través del Acuerdo 119/SE/16-04-2021, ratificó los Lineamientos aprobados por la Asamblea Municipal de representantes y autoridades, que reglamentan el modelo de elección, integración e instalación del Gobierno Municipal por Usos y Costumbres del Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, para el Proceso Electivo 2021.

II. PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA. El dieciséis de mayo de la presente anualidad, se recibió en Oficialía de Partes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, el oficio número PLE-1249/2021, signado por el licenciado Héctor Hernández Barragán, Actuario del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, a través del cual remite copia certificada del Acuerdo Plenario de fecha dieciséis de mayo del año en curso, asimismo remite el expediente original TEE/JEC/171/2021, para que esta Coordinación de lo Contencioso Electoral, instruya el Procedimiento Especial Sancionador, por el cual la ciudadana Eneida Lozano Reyes interpone queja y/o denuncia en contra de los ciudadanos y ciudadanas Rosario Morales Matilde, Tomás Espíndola Flores, Lorena Manrique Rafaela, Tomás Augusto Lozano Analco, y Ruth Hernández Gallardo, en su carácter de aspirantes a concejales del gobierno municipal comunitario de Ayutla de los Libres, Guerrero, por actos que podrían configurar Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

III. RADICACIÓN, RESERVA DE ADMISIÓN Y MEDIDAS PRELIMINARES DE INVESTIGACIÓN. El diecisiete de mayo de la presente anualidad, la autoridad instructora emitió un proveído mediante el cual tuvo por recibida la denuncia de mérito y la radicó bajo el número de expediente IEPC/CCE/PES/039/2021, asimismo, reservó su admisión y decretó medidas preliminares de investigación.

**EXPEDIENTE: IEPC/CCE/PES/039/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

Ahora bien, al considerar la existencia de una posible vulneración a su integridad física y a su vida, así como la de sus hijos Said, Elías y Seeidi de apellidos Escamilla Lozano, y la de los integrantes de la planilla 1: Juan García Juárez, Reyna Dorantes García y Jorge Luis Ozuna Chávez, a través de su escrito de queja, la denunciante solicitó el dictado de medidas de seguridad y/o protección, por lo que se ordenó la apertura del cuaderno auxiliar para proveer lo relativo a las medidas de protección solicitadas por la quejosa.



IEPC
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
GUERRERO
COMISIÓN DE QUEJAS
Y DENUNCIAS

IV. CUESTION PREVIA. Previamente a estudiar la procedencia de las medidas de protección solicitadas por la quejosa es conveniente destacar que, para revisar este asunto, esta Comisión de Quejas y Denuncias lo hará con perspectiva de género, dado que la actora señala que se cometió Violencia Política por Razón de Género en su contra¹.

La perspectiva de género es la metodología y mecanismo para estudiar las construcciones culturales y sociales entendidas como propias para hombres y mujeres.



IEPC
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
GUERRERO
COMISIÓN DE QUEJAS
Y DENUNCIAS

Juzgar con esta perspectiva implica reconocer la situación de desventaja particular en la cual históricamente se han encontrado las mujeres² -aunque no necesariamente está presente en todos los casos-, como consecuencia de la construcción que socioculturalmente existe en torno a la posición y rol que debieran asumir, como una cuestión inevitable e implícita a su sexo³.

Así, la perspectiva de género obliga a las personas juzgadoras y a las autoridades administrativas con funciones materialmente jurisdiccionales a incorporar en los procesos administrativos o jurisdiccionales un análisis de los posibles sesgos de desequilibrio que, de manera implícita o explícita, puedan estar contenidos en la ley o en el acto impugnado⁴.

¹ Esto, atendiendo a la tesis aislada 1a. CLX/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte, de rubro **DERECHO DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA CUMPLIR CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN SU ACTUACIÓN** (consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 18, mayo de 2015 [dos mil quince], tomo I, página 431).

² La perspectiva de género, como método analítico, debe aplicarse en todos los casos que involucren relaciones asimétricas, prejuicios y patrones estereotípicos, independientemente del género de las personas involucradas, con la finalidad de detectar y eliminar las barreras y los obstáculos que discriminan a las personas por su pertenencia al grupo de "mujeres" u "hombres"; lo que fue establecido en la tesis 1a. LXXIX/2015 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de rubro **IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. DEBE APLICARSE ESTE MÉTODO ANALÍTICO EN TODOS LOS CASOS QUE INVOLUCREN RELACIONES ASIMÉTRICAS, PREJUICIOS Y PATRONES ESTEREOTÍPICOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL GÉNERO DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS** (consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 15, febrero de 2015 [dos mil quince], página 1397).

³ De acuerdo a la tesis aislada 1a. XXVII/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte con el rubro **JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN** (consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 40, marzo de 2017 [dos mil diecisiete], tomo I, página 443).

⁴ Así fue establecido por la Sala Superior al resolver el juicio SUP-JDC-1619/2016.

Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Haciendo realidad el derecho a la igualdad⁵ de la SCJN, es un instrumento que permite identificar y evaluar las circunstancias estructurales que perpetúan las violaciones a los derechos humanos en virtud de la identidad sexo-genérica de las personas.

Además, señala que juzgar con perspectiva de género implica tener cuidado especial al estudiar los “tratamientos jurídicos diferenciados” en un conflicto, pues es necesario determinar si tal diferencia es objetiva y razonable o si, por el contrario, es injustificada e implica una vulneración a los derechos de alguna persona por razón de género.

Para ello, propone estudiar si dicho trato diferenciado **(i)** implica la existencia subyacente de algún rol o estereotipo de género, **(ii)** encuadra en alguna categoría sospechosa, **(iii)** tiene por objeto o resultado, el impedir, anular o menoscabar el reconocimiento, ejercicio o goce -en condiciones de igualdad- de los derechos humanos.

La aplicación de dicha metodología en un caso concreto según el Protocolo SCJN, sucede en diversas fases del proceso:

- **De manera previa o inicial:** Es necesaria su aplicación para estudiar si es necesario otorgar medidas de protección y la admisibilidad del asunto.
- **En el estudio:** Impacta el análisis de los hechos, la materia probatoria y la determinación del derecho aplicable.
- **En la resolución:** Implica una argumentación jurídica especial y de ser procedente, la reparación del daño.

Así, por lo que se refiere a la fase previa o inicial, cuando una autoridad tenga conocimiento de hechos de peligro en la integridad y vida de una víctima, se deben adoptar medidas necesarias para evitar alguna lesión o daño.⁶

Asimismo, se precisa y destaca que en el presente acuerdo únicamente se determinará lo relativo a las medidas de protección solicitadas, derivado de los presuntos actos que podrían configurar Violencia Política contra las Mujeres en Razón

⁵ Publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 2015 (dos mil quince) y consultable en: <https://www.scjn.gob.mx/registro/formulario/protocolo-para-juzgar-con-perspe>

⁶ Artículo 40 de la Ley General de Víctimas.

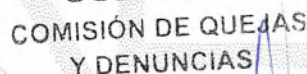
**EXPEDIENTE: IEPC/CCE/PES/039/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

de Género que refiere la quejosa, en virtud de que, de los presuntos actos de violencia, pudiera inferirse una posible vulneración a la integridad física y a la vida de la denunciante en el desarrollo de su proceso electivo, de ser votada.



IEPC
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
GUERRERO
COMISIÓN DE QUEJAS
Y DENUNCIAS

En ese sentido, toda vez que la denunciante en su escrito de queja, aduce que es víctima de violencia psicológica y simbólica, y que ha recibido amenazas de muerte en contra de ella, de su familia y de sus colaboradores; además, por parte de los denunciados ciudadanos y ciudadanas Rosario Morales Matilde, Tomás Espíndola Flores, Lorena Manrique Rafaela, Tomás Augusto Lozano Analco, Ruth Hernández Gallardo, en su carácter de aspirantes a concejales del Gobierno Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, Guerrero, aduce violencia verbal, ha sido denostada y violentada por razones de género, buscan intimidarla, para que deje de participar en el proceso de selección de integrar el Órgano de Gobierno Municipal de Ayutla de los Libres, Guerrero; y específicamente al ciudadano Tomás Augusto Lozano Analco, le denuncia también violencia simbólica, en relación a esta manifestación "cuanto me das para que te pase a mi gente, juntos podemos ganar y partirla la madre a Eneida", por lo que, lo procedente es analizar la procedencia de las medidas de protección que solicita, sin que ello implique prejuzgar el fondo del asunto, dado que únicamente se determinará la procedencia o no de las medidas solicitadas, a fin de salvaguardar la integridad de la quejosa en el desarrollo de su proceso electivo.



IEPC
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
GUERRERO
COMISIÓN DE QUEJAS
Y DENUNCIAS

V. PRUEBAS OFRECIDAS POR LA DENUNCIANTE.

"1.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia simple de mi credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral. Prueba que relaciono con todos y cada uno de los hechos y agravios del presente escrito.

2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia simple del escrito suscrito por los integrantes de la planilla 1 conformada por Eneida Lozano Reyes, propietaria mujer; Juan García, propietario hombre; Reyna Dorantes García, suplente mujer y Jorge Luis Ozuna Chávez, suplente hombre mediante el cual manifestamos a los integrantes de la Comisión de Elección, Integración e Instalación del Gobierno Municipal Comunitario los distintos hechos ocurridos durante la Asamblea electiva de 2 de mayo de 2021, así como las distintas amenazas que hemos padecido. [...]

3. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia simple del informe rendido por Reyna Dorantes García y Daffny Sánchez Valente, en calidad de escrutadores de la mesa de debates de la asamblea comunitaria que se llevó a

**EXPEDIENTE: IEPC/CCE/PES/039/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

cabo el día 2 de mayo de 2021 a las 17 hora con 40 minutos, en las instalaciones de la delegación municipal colonia Vicente Guerrero de la ciudad de Ayutla de los Libres, Guerrero. [...]



4. DOCUMENTAL. Consistente en copia simple del informe rendido por los integrantes del Comité Delegacional de la colonia Vicente Guerrero, derivado de los hechos ocurridos en dicha colonia de la ciudad de Ayutla de los Libres, Guerrero, cuando eran las 17 horas con 40 minutos del día 2 de mayo de 2021. [...]

5. TÉCNICA. Captura de pantalla de mi celular personal número 745 103 54 83 de compañía Telcel en la que se advierte que alguna persona desde el número de celular 745 124 1709 efectúa amenazas de muerte para mí y mi familia. Equipo que pongo a disposición de este órgano jurisdiccional para efecto de visualizar esos mensajes, en caso de que se requiera.

6. TÉCNICA. Captura de pantalla de mi celular personal número 745 103 54 83 de compañía Telcel en la que se advierte que alguna persona desde el número de celular 745 124 1709 insiste en las amenazas. Equipo que pongo a disposición de este órgano jurisdiccional para efecto de visualizar esos mensajes, en caso de que se requiera.

7. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. En todo lo que beneficie a mi pretensión.

8. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo lo que favorezca a mi pretensión"

VI. CONCLUSIONES PRELIMINARES. Los hechos narrados por la quejosa en su escrito de queja, a partir de un estudio preliminar, permite vislumbrar la existencia de hechos que pudieran vulnerar su integridad física en el desarrollo de sus derechos político electorales, al ser aspirante a Concejal del Gobierno Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, Guerrero, lo anterior con independencia de que, será en el momento procesal que la autoridad jurisdiccional determine la existencia o no de las infracciones atribuidas a los denunciados, en ese sentido conviene destacar las siguientes conclusiones preliminares:

- La ciudadana Eneida Lozano Reyes, refiere ser indígena perteneciente a la etnia indígena Tu'un Savi.

**EXPEDIENTE: IEPC/CCE/PES/039/2021.
CUADERNO AUXILIAR**



- La ciudadana Eneida Lozano Reyes, se ostenta como representante propietaria electa de la colonia Vicente Guerrero del Gobierno Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, Guerrero, electa el dos de mayo del año en curso en la Asamblea General Comunitaria de la colonia Vicente Guerrero, realizada con el objeto de elegir a los concejales del Gobierno Municipal de Ayutla de los Libres, Guerrero.
- Los denunciados ciudadanos y ciudadanas: 1. Rosario Morales Matilde; 2. Tomás Espíndola Flores; 3. Lorena Manrique Rafaela; 4. Tomás Augusto Lozano Analco; y 5. Ruth Hernández Gallardo, son aspirantes a concejales del Gobierno Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, Guerrero
- La ciudadana Eneida Lozano Reyes, refiere que ha sido y sigue siendo víctima de presuntos actos que pueden constituir Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género, cuyos efectos subsisten en la actualidad, y de los cuales ha recibido amenazas de muerte desde un número de celular.

VII. ANÁLISIS DE RIESGO. Ahora bien, precisado lo anterior, toda vez que pudiera verse afectada la integridad física de la denunciante en el desarrollo de su derecho a ser votada, previo al análisis de la procedencia o no de las medidas de protección cuando una autoridad se encuentra ante una solicitud de órdenes de protección debe:

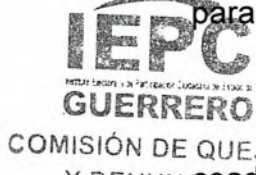
i) Analizar los riesgos que corre la víctima para poder generar un plan acorde con las necesidades de protección, lo que involucra que, de ser pertinente, se realicen diversas diligencias.

Dependiendo del caso, tomando en cuenta la situación de la parte denunciante y a partir de la urgencia intrínseca de las medidas, es la propia autoridad que recibe la solicitud quien tiene que llevar a cabo tal análisis.

ii) En caso de adoptar las medidas solicitadas, justificar su necesidad y urgencia, esto es, analizar las circunstancias que podrían derivar en un daño grave de difícil reparación a derechos como la vida, la integridad personal y la libertad.

**EXPEDIENTE: IEPC/CCE/PES/039/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

iii) Actuar con una debida diligencia en aras de que la autoridad facultada resuelva lo correspondiente respecto a la adopción de medidas, por lo que el dictado debe ser con prontitud y solo por el tiempo necesario para que la autoridad facultada para ello se pronuncie.

**IEPC**
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
GUERRERO
COMISIÓN DE QUEJAS
Y DENUNCIAS

iv) Analizar a qué autoridades estatales debe vincularse para efecto de que coadyuven con este órgano administrativo electoral en los casos en que deba garantizarse de manera preventiva la integridad de las mujeres que dicen ser víctimas de Violencia Política en Razón de Género.

Como se advierte, es necesario diseñar una metodología que se haga cargo de las particularidades derivadas del ejercicio de los derechos político-electorales, y que, a su vez, permita evaluar los riesgos que corre una víctima y, a partir de ello, generar un plan de protección adecuado a fin de que las medidas adoptadas sean eficaces.

Desde luego, esta metodología debe hacerse cargo de la opinión de quien solicita las medidas, lo que no implica trasladarle la responsabilidad de delinearlas, sino atender la problemática acorde a su situación particular.

En los términos relatados esta Comisión de Quejas y Denuncias procede a estudiar el riesgo en la cuestión planteada.

Como ya se mencionó, la actora señala que tiene incertidumbre, angustia, temor y estrés de las amenazas que ha recibido, y de las cuales hace responsables a los ciudadanos y ciudadanas: 1. Rosario Morales Matilde; 2. Tomás Espíndola Flores; 3. Lorena Manrique Rafaela; 4. Tomás Augusto Lozano Analco; y 5. Ruth Hernández Gallardo, en su carácter de aspirantes a concejales del Gobierno Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, Guerrero, por lo que a su decir constituyen Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, que refiere en su escrito antes mencionado.

Por tanto, y toda vez que, en la presente queja, la quejosa aduce una presunta vulneración a su derecho a la integridad física y a su vida, durante el desarrollo del proceso electivo del cual refiere ser representante propietaria electa de la colonia Vicente Guerrero del Gobierno Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, Guerrero, derivado de las amenazas de muerte que ha sufrido en contra de ella, su familia y sus colaboradores, manifestando ser víctima de violencia psicológica y

simbólica, lo cual ha tenido como resultado, a decir de la quejosa, buscar menoscabar/anular su derecho político-electoral de ser votada.

IEPC
COMISIÓN DE QUEJAS
Y DENUNCIAS

En observancia del principio de apariencia del buen derecho y peligro en la demora, esta Comisión de Quejas y Denuncias, considera oportuno y necesario, vincular a las autoridades que se enunciarán más adelante para que, en el ámbito de su respectiva competencia, adopten las medidas que, en su caso, en este acuerdo se requieran y las que conforme a derecho resulten procedentes para proteger los derechos y bienes jurídicos de la denunciante.

VIII. ESTUDIO DE LA PROCEDENCIA DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN.

En efecto, esencial y destacadamente la denunciante aduce que tiene el temor fundado de que su vida e integridad física se encuentran en peligro, así como la de sus hijos Said, Elías y Seeidi de apellidos Escamilla Lozano, y la de los integrantes de la planilla 1: Juan García Juárez, Reyna Dorantes García y Jorge Luis Ozuna Chávez.

Como medidas de protección, la actora solicita lo siguiente:

- Que se implementen todas las medidas necesarias y eficaces con la finalidad de evitar violaciones de difícil e imposible reparación para salvaguardar su integridad física y su vida, la de sus hijos Said, Elías y Seeidi de apellidos Escamilla Lozano, y la de los integrantes de la planilla 1: Juan García Juárez, Reyna Dorantes García y Jorge Luis Ozuna Chávez.
- Dentro de las medidas que dice pueden proveer a víctimas en caso de violencia son: proveer a la víctima del servicio de escoltas, impedir el acceso del agresor a las instalaciones del partido, de la casa de campaña o de los lugares que frecuente la víctima, así como la prohibición de intimidar o molestar a la víctima o integrantes de su familia en su entorno social.
- Solicita se ordene un análisis de riesgo y plan de seguridad.

Para analizar la procedencia o no de la solicitud, es importante describir que la Sala Superior⁷ ha delineado que las medidas cautelares⁸:

⁷ En los recursos SUP-REP-152/2017 y SUP-REP-200/2020.

⁸ Ver. **Jurisprudencia 14/2015**, cuyo rubro es: **"MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA"**. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 28, 29 y 30.

**EXPEDIENTE: IEPC/CCE/PES/039/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

- Constituyen un mecanismo de tutela preventiva o instrumento jurídico para prevenir la posible afectación a un derecho, a los principios rectores en la materia, o para garantizar el cumplimiento de alguna obligación jurídica, en forma inmediata y eficaz, y previamente a cualquier resolución de fondo y definitiva en la materia.

- Tienen como finalidad constituir un instrumento de protección contra el peligro de que una conducta ilícita o probablemente ilícita continúe o se repita y con ello evada el cumplimiento de una obligación, se afecte algún derecho o se lesione un valor o principio protegido por el sistema jurídico.
- Tal protección debe dirigirse contra situaciones, hechos, conductas o determinaciones que constituyan una amenaza o afectación real, de manera que sea necesaria una garantía específica, oportuna, real, adecuada y efectiva, a través de medidas que cesen las actividades que causan el daño o prevengan el comportamiento lesivo.
- Los elementos básicos que deben analizarse para la procedencia de las medidas de protección, como instrumento que tiene la finalidad de lograr el cese de los actos o hechos que constituyan la infracción denunciada, es evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales, o que se ponga en riesgo la vulneración de bienes jurídicos tutelados por las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias.

En ese contexto, la Sala Superior ha considerado⁹ que, para el otorgamiento o no de una medida cautelar, el órgano facultado debe:

- Analizar la apariencia del buen derecho, para lo cual, tendrá que examinar la existencia del derecho cuya tutela se pretende y su posible afectación.
- El peligro en la demora, o la existencia de causas que justifiquen de manera fundada que, la espera de la resolución definitiva generaría la desaparición de la materia de la controversia. Asimismo, que la probable afectación es irreparable.

⁹ Ver las sentencias dictadas en los expedientes SUP-REP-16/2017, SUP-REP-13/2017, SUP-REP-12/2017, SUP-REP-4/2017, entre otros.

El primer elemento, apunta a una credibilidad objetiva y seria sobre la **juridicidad** del derecho que se pide proteger, a fin de descartar que se trate de una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable; en tanto que, **el segundo elemento consiste, en la posible frustración de los derechos de quien promueve la medida cautelar o de protección, ante el riesgo de su irreparabilidad.**


La situación mencionada obliga, indefectiblemente, a realizar una **evaluación preliminar** en torno a la justificación de las respectivas posiciones enfrentadas, a saber, la apariencia del buen derecho, así como el temor fundado de que mientras llega la tutela efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final, y así determinar si procede o no el dictado de medidas cautelares.

En atención a la naturaleza de las medidas precautorias, se considera que se requiere una **acción ejecutiva, inmediata y eficaz**, que debe adoptarse mediante la ponderación de los elementos que obren en el expediente, generalmente aportados por la solicitante, con el fin de determinar, en grado de seria probabilidad, si pueden producirse daños o lesiones irreparables a los principios rectores de la materia electoral con la permanencia de cierto tipo de acciones o conductas.

En ese contexto, esta clase de providencias, como todo acto de molestia por parte de la autoridad, **necesariamente deben estar fundadas y motivadas para su concesión o denegación, en estricta observancia al principio de legalidad**, ya que según sea el sentido de la resolución, con ellas puede afectarse a cualquiera de los sujetos en conflicto.

Por tanto, la autoridad que tenga a su cargo establecer si procede o no acordarlas y, en su caso, determinar cuál procede adoptar, debe realizar diversas ponderaciones que permitan su justificación, como son las atinentes a los derechos en juego, la irreparabilidad de la afectación, la idoneidad de la medida de protección, así como su razonabilidad y proporcionalidad.

Aunado a lo anterior, debe decirse que la imposición de medidas de protección que reúnan los requisitos apuntados, **solo proceden respecto de conductas que se refieran a hechos objetivos y ciertos, no así respecto de aquellos que se hayan consumado totalmente o futuros de realización incierta**, pues el objeto de estas medidas es restablecer de manera transitoria el ordenamiento jurídico conculcado,


IEPC
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
GUERRERO
COMISIÓN DE QUEJAS
Y DENUNCIAS
desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica, con la finalidad de evitar la generación de daños irreparables.

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias, en tanto la determinación no constituye un fin en sí mismo, y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves. Su finalidad es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución definitiva, asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho, cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento, no solo de otra resolución, sino también del interés público, porque buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica.

Lo anterior encuentra sustento en lo conducente en la tesis de Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: **MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.**¹⁰

Finalmente, se advierte que la medida de protección adquiere justificación si hay un derecho o principio fundamental que requiere protección provisional y urgente, a raíz de una afectación producida -que se busca no sea mayor- o de inminente producción, mientras se sigue el procedimiento en el cual se discute la pretensión de fondo de quien dice sufrir el daño o la amenaza de su actualización.

En este sentido, la determinación de adoptar o no medidas cautelares responde a parámetros de ponderación diferentes a aquéllos vinculados con el fondo del procedimiento, pues en éstos se analiza no solo la existencia de la conducta o su veracidad, sino también la plena acreditación de la infracción, la responsabilidad de los sujetos denunciados y la sanción correspondiente.

En algunos casos, para decidir sobre la procedencia o no de la medida de protección, **quien juzga debe atender a las manifestaciones de la parte quejosa hechas en su demanda**¹¹, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la

¹⁰ Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, marzo de 1998, pág. 18.

¹¹ Expediente SUP-REC-73/2020.



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS**

**EXPEDIENTE: IEPC/CCE/PES/039/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

medida de protección, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que la parte quejosa da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, porque para resolver sobre la referida medida, **se debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos** – dado que las autoridades que investiguen cualquier asunto que verse sobre cualquier tipo de violencia contra la mujer deben actuar con la debida diligencia, tomando las medidas que se consideren necesarias para el caso en concreto¹², así como de actuar con perspectiva de género, a efecto de visualizar una posible situación de desventaja.

Sin que esto implique prejuzgar sobre el fondo del asunto pues al estudiar la controversia es cuando se determinará si están acreditados los hechos denunciados y si la parte quejosa tiene razón o no en lo que denuncia.

En ese sentido se debe realizar un análisis preliminar y con los elementos indiciarios que puedan servir de sustento para proveer sobre las medidas solicitadas, precisamente, porque se apoya en las meras afirmaciones de las personas solicitantes y no en la certeza de la existencia de las pretensiones¹³, dado que únicamente se busca asegurar de forma provisional los derechos para evitar un daño trascendente, en virtud de que, en ciertas etapas procedimentales, los órganos jurisdiccionales o administrativos con funciones materialmente jurisdiccionales no cuentan con los elementos probatorios necesarios para emprender un análisis más pormenorizado de la controversia.

¹² Sirve de apoyo la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: **DELITOS CONTRA LAS MUJERES. LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE SU INVESTIGACIÓN ESTÁN LLAMADAS A ACTUAR CON DETERMINACIÓN Y EFICACIA A FIN DE EVITAR LA IMPUNIDAD DE QUIENES LOS COMETEN.**

¹³ El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: **"SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO."**, ha entendido que la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, por tanto, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. Dicho análisis debe realizarse, **sin prejuzgar sobre la certeza del derecho**, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, **toda vez que aquella sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones**, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión.

Además de que¹⁴, de conformidad con los artículos 1 y 133 de la Constitución; 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2 inciso c) 3 y 7 inciso b) de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 4 incisos b) y j) y 7 incisos b), d) y f) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 27 y 33 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; así como 40 de la Ley General de Víctimas, se desprende que el Estado mexicano está obligado a reconocer, respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres.

Entre ellos, el derecho a la integridad física, psíquica y moral, y a acceder y ocupar cargos públicos en todos los planos gubernamentales y de toma de decisiones; y que, por tanto, cuando exista Violencia Política por Razón de Género contra las Mujeres, los órganos jurisdiccionales o administrativos en materia electoral deben dictar y solicitar medidas de protección que garanticen el respeto del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres¹⁵.

De manera que, con la adopción de medidas de protección se previene la afectación injustificada de bienes jurídicos y derechos, o su agravamiento, por la conducta que se estima, en un **análisis preliminar**, que puede resultar contraria a los principios constitucionales y convencionales vinculados a los derechos y libertades públicas, permitiendo así también las condiciones para una reparación integral.

Bajo estos elementos, esta Comisión de Quejas y Denuncias considera que, **de un análisis preliminar, en el caso concreto y atendiendo las obligaciones convencionales que tiene este órgano administrativo electoral como autoridad del Estado Mexicano de actuar con la debida diligencia**¹⁶ debe concederse la adopción de medidas de protección para la quejosa, sus hijos y sus colaboradores.

Lo anterior es en razón de que la quejosa en la presente instancia señala en los hechos de su denuncia, los actos realizados en su contra, consisten en amenazas realizadas por los ciudadanos y ciudadanas Rosario Morales Matilde, Tomás

¹⁴ Expediente SUP-REC-73/2020.

¹⁵ Resulta orientadora la Tesis X/2017, con título: "**VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PUEDEN MANTENERSE, INCLUSO DESPUÉS DE CUMPLIDO EL FALLO, EN TANTO LO REQUIERA LA VÍCTIMA**", que se consulta en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 10, Número 20, 2017, páginas. 40 y 41.

¹⁶ Artículo 7 incisos b) y f) de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida como "Convención de Belém Do Pará".



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS**

**EXPEDIENTE: IEPC/CCE/PES/039/2021.
CUADERNO AUXILIAR**



Espíndola Flores, Lorena Manrique Rafaela, Tomás Augusto Lozano Analco, Ruth Hernández Gallardo, aspirantes a concejales del Gobierno Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, Guerrero, ocurridos en el desarrollo del proceso electivo del Gobierno Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, Guerrero, buscando intimidarla para dejar de participar en el proceso electivo mencionado.¹⁷

Bajo este contexto, dadas las manifestaciones que la denunciante formuló en su escrito de queja, sobre probables hechos que podrían poner en riesgo su vida e integridad personal, tanto de ella, sus hijos y los integrantes de la planilla uno, es que, el primer elemento se cumple, dado que ha sido criterio de la Sala Regional CDMX del TEPJF¹⁸, que para que exista la apariencia del buen derecho, el dictado de medidas de protección no depende de que quienes las solicitan acrediten un riesgo latente o clima de violencia que impere en su entorno.

Además de ello, esta Comisión de Quejas y Denuncias toma en cuenta los derechos que la denunciante sostiene están en riesgo, pues tanto el derecho a la vida, así como al de la integridad personal están protegidos, en grado predominante tanto a nivel constitucional como convencional.

Ello en términos de los artículos 1 y 22 de la Constitución; 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 4 inciso a) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer, así como a lo precisado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a la vida, en el sentido de que éste es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerequisite para el disfrute de todos los demás derechos humanos¹⁹.

Mientras que, respecto a la integridad personal, que radica en la salvaguarda de la persona en su ámbito físico, psicológico y moral, éste se encuentra protegido por los artículos 1, 14, 16, 20 y 22 de la Constitución; 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 7 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 4 inciso b) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

¹⁷ Hecho señalado en su página 12 del escrito de queja y/o denuncia

¹⁸ SCM-JDC-121/2019.

¹⁹ Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de los "Niños de la calle" (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS**

**EXPEDIENTE: IEPC/CCE/PES/039/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

IEPC GUERRERO
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS

Por lo que, si la apariencia del buen derecho apunta a una credibilidad sobre la jurisdicción del derecho que se pide proteger, es que, atendiendo a los elementos del caso, esta Comisión de Quejas y Denuncias de este Instituto, estima que sí existe la apariencia aludida.

Asimismo, el peligro en la demora también se actualiza porque atendiendo a que la medida solicitada tiene como pilar la amenaza a la integridad física de la denunciante, sus hijos y los integrantes de la planilla 1, es que se justifica que sea en este momento (y no hasta la admisión del presente asunto) el dictado de la medida cautelar o de protección que corresponda, pues la espera de la admisión podría desatar la irreparabilidad del derecho que se pretende proteger (vida e integridad personal).

De ahí que, con independencia de la veracidad de los actos de violencia aducidos por la promovente del presente procedimiento sancionador, ello no impide que esta Comisión, pueda asegurar, de manera preliminar, la posibilidad de ejercer una tutela preventiva a efecto de impedir que las transgresiones a los derechos que aduce podrían ser vulnerados, puedan consumarse de modo irreparable de esperar a una sentencia de fondo, dado el carácter provisional, para mantener la materia del procedimiento, pues a pesar de estar relacionada con el ejercicio de derechos político electorales, están vinculados indisolublemente, con la integridad física de la denunciante, y puede incidir o impactar en el ejercicio y goce de derechos fundamentales.

Conforme a los argumentos que han quedado expuestos, esta Comisión de Quejas y Denuncias, considera adecuado otorgar a la denunciante **medidas de protección**, sin prejuzgar el fondo del asunto y sin que esto implique un pronunciamiento en relación con lo fundado de sus pretensiones, dado que, para otorgar la medidas provisionales, el análisis debe realizarse, **sin prejuzgar sobre la certeza del derecho**, es decir, sobre la legalidad o ilegalidad de los actos impugnados **ni sobre la veracidad de los actos de violencia denunciados**, dado que esto solo puede determinarse en la sentencia de fondo, la cual será dictada en el momento procesal oportuno por la autoridad jurisdiccional.

En consecuencia, al tratarse de una controversia que se relaciona con la posible existencia de actos de Violencia Política en Razón de Género en agravio de la parte denunciante, con fundamento en los artículos 463 Bis de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 27 y 33 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en relación al diverso 438 bis, y 280 último párrafo de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS**

**EXPEDIENTE: IEPC/CCE/PES/039/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

Guerrero, se considera necesario emitir las siguientes medidas de protección, a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo y hasta en tanto se dicte sentencia definitiva en el presente asunto, de la forma siguiente:

1. Secretaría Seguridad Pública del Estado de Guerrero y Secretaría General de Gobierno del Estado de Guerrero.

- Se solicita a la Secretaría Seguridad Pública del Estado de Guerrero, para que de **manera inmediata** asigne los elementos de seguridad pública necesarios para que custodien a la quejosa Eneida Lozano Reyes; sus hijos, Said, Elías y Seeidi de apellidos Escamilla Lozano; y a los integrantes de la planilla 1, Juan García Juárez, Reyna Dorantes García y Jorge Luis Ozuna Chávez; atendiendo al plan de seguridad que para tal caso diseñe o desarrolle con la información que otorgue la ciudadana Eneida Lozano Reyes, en relación a la calendarización relativa al modelo de elección e integración del Órgano de Gobierno Municipal por Sistemas Normativos Propios (usos y costumbres) para el Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero.
- Se solicita a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Guerrero para mayor eficacia de las medidas anteriormente mencionadas, y en uso de sus facultades **coadyuve** con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a su cumplimiento.

En ese sentido, se requiere a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y a la Secretaria General de Gobierno del Estado de Guerrero, respectivamente, para que, **dentro del plazo de veinticuatro horas** a partir de la notificación del presente acuerdo, rindan a esta Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, informes sobre el cumplimiento que den a las medidas de protección otorgadas, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 443 Bis de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, con el apercibimiento que de no rendir sus informes dentro del tiempo concedido se aplicarán las medidas de apremio previstas en el artículo 37 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, de conformidad con el diverso 461, párrafo décimo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Sirve de apoyo a lo anterior, los criterios sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Tesis XIV/2015 y en la



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS**

**EXPEDIENTE: IEPC/CCE/PES/039/2021.
CUADERNO AUXILIAR**

Jurisprudencia 10/2018, respectivamente, de rubros: **"PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD DE REQUERIR INFORMACIÓN HASTA EN DOS OCASIONES, ES ACORDE CON LOS PRINCIPIOS DE EXHAUSTIVIDAD, EFICACIA Y EXPEDITEZ EN LA INVESTIGACIÓN."** y **"MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN."**

En el entendido que, **lo requerido deberá garantizarse por las autoridades vinculadas a partir de la notificación que se les haga del presente acuerdo plenario**, hasta que el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, emita la resolución que ponga fin al presente juicio de la ciudadanía, lo cual en su momento les será notificado.

Asimismo, con la notificación que se realice a las autoridades requeridas, anéxese copia certificada del escrito de queja de la denunciante.

IX. Invitación a la actora para manifestarse, si así lo desea, sobre las medidas implementadas y las acciones realizadas por las autoridades vinculadas.

La Comisión de Quejas y Denuncias de este Instituto, estima adecuado hacer del conocimiento a la actora que durante todo el tiempo que dure la instrucción del presente asunto, podrá hacer las manifestaciones que estime convenientes respecto a la eficacia de las medidas implementadas y las acciones realizadas por las autoridades vinculadas²⁰.

En razón de lo anterior, de manera adicional a la notificación que se debe realizar a las autoridades vinculadas, se ordena notificar en forma personal a la denunciante.

Por otra parte, **se conmina** a los ciudadanos y ciudadanas: 1. Rosario Morales Matilde; 2. Tomás Espíndola Flores; 3. Lorena Manrique Rafaela; 4. Tomás Augusto Lozano Analco; 5. Ruth Hernández Gallardo, en su carácter de aspirantes a concejales del Gobierno Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, Guerrero, para que se abstengan de realizar cualquier conducta dirigida a menoscabar los derechos políticos electorales de la ciudadana Eneida Lozano Reyes, así como, evitar cualquier manifestación que implique violencia física, simbólica, psicológica, propiciando un ambiente de respeto.

²⁰ Criterio que deriva del juicio SCM-JDC-121/2020.



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS**

**EXPEDIENTE: IEPC/CCE/PES/039/2021.
CUADERNO AUXILIAR**



Para el debido cumplimiento de esta determinación, se requiere a la quejosa para que dentro del término de **doce horas** proporcione a esta Comisión informe si tiene actividades a desarrollar como representante electa de la Colonia Vicente Guerrero, como actividades previas a la preparación de la Asamblea Municipal Comunitaria de Representantes y Autoridades que tiene programado para la realización de sus actos proselitistas derivados de su proceso electivo como representante propietaria de la Colonia Vicente Guerrero del Gobierno Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, Guerrero, del que hizo del conocimiento a la autoridad electoral, a efecto de que las autoridades vinculadas estén en condiciones de desahogar los requerimientos aquí ordenados, en el entendido de que el término otorgado a las autoridades vinculadas comenzará a computarse a partir de que se les notifique la información que proporcione la quejosa.

X. VISTA AL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. Ahora bien, y toda vez que en la presente queja se denuncia violencia contra la ciudadana Eneida Lozano reyes, dese vista al Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres, para que en el ámbito de su competencia coadyuve con las autoridades vinculadas en el cumplimiento de las medidas de protección otorgadas, ello de conformidad en el artículo 39, 40 y 42 de la Ley número 553 de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia del estado libre y soberano de Guerrero, así como en el artículo 3 del Reglamento del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres y que a la letra dice:

[...] ARTÍCULO 3.- El Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, es el conjunto interrelacionado de organismos del Sector Público y la Sociedad Civil, que tiene por objeto coordinar la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como llevar a cabo las demás atribuciones que le confieran la Ley de Acceso y el Reglamento de la Ley. [...]

En mérito de lo previamente expuesto y fundado, con fundamento en los artículos 435, segundo párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, 75 y 79 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, la Comisión de Quejas y Denuncias:

ACUERDA

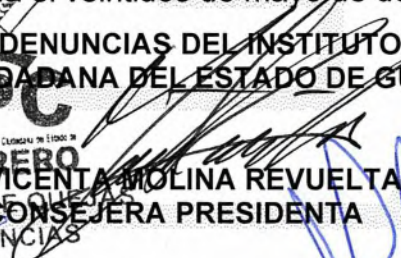


UNICO. Se **dictan** medidas de protección a favor de la ciudadana **Eneida Lozano Reyes**, en su carácter de aspirante a concejal del Gobierno Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, Guerrero; de sus hijos, **Said, Elías y Seidi de apellidos Escamilla Lozano**; y a los integrantes de la planilla 1, **Juan García Juárez, Reyna Dorantes García y Jorge Luis Ozuna Chávez**, para los efectos precisados en este acuerdo.

Notifíquese personalmente a la denunciante, **por oficio** a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y; a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Guerrero; de conformidad con lo establecido en el artículo 445 de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y 65 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.

El presente acuerdo fue aprobado por **unanimidad** de votos de la y los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en la Décima Quinta Sesión Extraordinaria de trabajo, celebrada el veintidós de mayo de dos mil veintiuno.

LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO.



C. VICENTA MOLINA REVUELTA
CONSEJERA PRESIDENTA



C. AMADEO GUERRERO ONOFRE
CONSEJERO ELECTORAL



C. EDMAR LEÓN GARCÍA
CONSEJERO ELECTORAL



C. AZUCENA ABARCA VILLAGÓMEZ
SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN.

NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS PERTENECEN AL ACUERDO 021/CQD/22-05-2021, ACUERDO PLENARIO SOBRE LA PROCEDENCIA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A FAVOR DE LA C. ENEIDA LOZANO REYES, POR PRESUNTOS ACTOS QUE PODRÍAN CONSTITUIR VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LA MUJER EN RAZÓN DE GÉNERO, RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CON CLAVE IEPC/CCE/PES/039/2021.